

## AMPARO.

*Promovido en el Juzgado de Distrito de Jalisco, por el C. Antonio Alvarez del Castillo y otros comerciantes de Guadalajara, contra la Administracion de rentas de la misma Ciudad, que les hace el cobro del uno y medio por ciento por la extraccion del numerario que tenían que remitir para su exportacion.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: Don Antonio Alvarez del Castillo y otros comerciantes de esta Capital, han pedido amparo contra la Administracion principal de rentas de la misma Capital por el cobro que les hace del uno y medio por ciento por derechos de extraccion sobre los caudales puestos en la conducta que salió de aquí para el Manzanillo el día 13 del corriente; considerando dicho cobro y las leyes del Estado en que tuvo origen y hoy se apoya, (Decretos de 31 de Marzo y 17 de Junio de 1872, y el número 357, que actualmente rige,) como contrarios á la Constitucion, no solo por atacar las garantías que otorga á la propiedad, sino por invadir la esfera de la autoridad federal, al imponer derechos sobre los caudales destinados á la exportacion, contra lo prevenido en la fraccion 1ª del artículo 112 de aquel Código fundamental.

Suspendido por el Juzgado el acto reclamado, contra la opinion del que suscribe, debe resolver en seguida sobre lo principal del negocio.

Inútil le parece al Promotor estenderse en la manifestacion de las varias razones que lo asisten para creer que el cobro del uno y medio por ciento por extraccion de caudales, y el decreto del Estado en que se apoya ese cobro, no son contrarios á las garantías que la Constitucion federal otorga

á la propiedad, ni opuestas á lo que ordena en la fraccion 1ª de su artículo 112; al prohibir esa fraccion, segun la significacion gramatical de las palabras que usa, únicamente que los Estados impongan contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones, dejándoles por lo mismo, facultad de que los impongan sobre el comercio interior á los efectos que se introducen de un Estado á otro, conforme á los artículos 12 en sus fracciones 9ª y 10ª, y 117 de la misma Constitucion; al haber sido aprobada dicha fraccion 1ª en el sentido antes explicado por los legisladores del Congreso constituyente, como se ve en la obra relativa del C. Francisco Zarco; al derogarse por la ley de 31 de Mayo de 1872 los artículos 19 y 83 del Arancel de aduanas marítimas vigente, en que el C. Matías Romero trató de establecer en lo relativo á importaciones una inteligencia contraria al precepto constitucional, á los derechos y vida de los Estados y muy conforme á la que sostienen los autores competentes con motivo de exportaciones; y al no cobrarse á los Señores Alvarez del Castillo y socios, el uno y medio por ciento sobre los caudales que pusieron en conducta, por la exportacion al extranjero que hagan de esos caudales, sino por la extraccion del Estado que de los mismos van á ejecutar, sin consideracion alguna á que los embarguen ó no en el puerto del Manzanillo, es de notoria evidencia que ni el cobro referido, ni la ley en que se apoya, son anticonstitucionales y que el amparo solicitado carece de fundamento.

Repito el Promotor que le parece inútil estenderse en su dictamen sobre las razones que antes indica y otras mas que pudiera agregar, cuando en el informe rendido sobre lo principal por la Administracion de rentas de ésta Ciudad, se encuentra tratada la cuestion con bastante amplitud, y notable acierto; y por lo mismo, aceptando en todas sus partes ese informe y con apoyo de lo dicho, concluye pidiendo:

1ª Que se revoque por el Juzgado la sus-

pension provisional que decretó del acto reclamado, y

2º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los peticionarios, contra el cobro del uno y medio por ciento de que se quejan, ni contra la ley del Estado que lo tiene establecido.

Guadalajara, Enero 19 de 1874.—Firmado.—A. Camarena.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guadalajara, Febrero 16 de 1874.—Vistos: los Sres. D. Antonio Alvarez del Castillo, Basabe y Arce, Francisco Martinez Negrete y Cº, R. Miravete, Fernando Somellera Hermanos, Oetlings Rienchs, p p. G. H. Satler en liq., German Hell, Angel B. y Puga, T. I. Kunhard y Agustin Blume, entablaron ante este juzgado el 10 del próximo pasado Enero, juicio de amparo y proteccion de garantías, fundándose en la fraccion 3ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, contra las leyes y actos de las autoridades del Estado, que imponen uno y medio por ciento sobre la estraccion de plata acuñada, en conducta ordinaria, fundándose para ello en que habiendo sacado guía de exportacion de la Jefatura Superior de Hacienda del Estado, y pagado el cinco por ciento que con arreglo al arancel de Aduanas marítimas, debe satisfacerse á la federacion, era el dinero que se remite en conducta, materia de comercio exterior, no pudiendo por lo mismo las autoridades del Estado, reagrar los derechos de exportacion ya satisfechos, por prohibirlo la fraccion 1ª art. 112 de la Constitucion general; pidieron igualmente los interesados se decretara la suspension del acto reclamado, estando la conducta para salir el dia 13 del propio mes, y tener que exigir el pago del uno y medio por ciento la Aduana de esta capital.

El juzgado, previo el informe rendido conforme á la ley, por el C. Administrador

del ramo, como ejecutor del acto reclamado, y el parecer fiscal, decretó la suspension del acto, haciendo uso de la amplia facultad que al efecto concede el artículo 6º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Esta providencia es sobradamente justa, porque evita á los interesados el daño irreparable de tener paralizado y sin giro una cantidad de dinero por término indefinido, aun cuando este sea la terminacion del juicio á su favor, cuando al contrario, al Erario del Estado no se le sigue ninguno por recibir ese impuesto en Enero ó Marzo, dado el caso de que la Justicia de la Union no ampare á los interesados.

Pedido al C. Administrador de rentas el informe prevenido en el artículo 9º de la ley de 20 de Enero citada, lo evacuó sosteniendo la constitucionalidad de las leyes del Estado, y consiguientemente la de sus actos, pidiendo se negara el amparo por no existir la invasion de facultades federales de que se quejan los solicitantes. Las razones en que se funda el C. Administrador, son las siguientes: 1ª Que la facultad exclusiva de la Union, en cuanto á comercio, se limita constitucionalmente al comercio extranjero, al que se hace en los puertos y fronteras, estando prohibido á los Estados alterar los aranceles marítimos y fronterizos. 2ª Que en cuanto al comercio interior solo tiene la federacion el derecho de impedir, con arreglo á la fraccion 9ª del artículo 72, que se establezcan restricciones onerosas por los Estados, fijando las bases de la legislacion mercantil, quedando todo lo demas, sujeto á la autoridad de los mismos Estados. 3ª Que la fraccion 1ª del artículo 112, no debe entenderse como lo quieren los peticionarios, por que pugna con esa inteligencia. A.... La significacion etimológica de la palabra importacion y la filosofia del idioma. B. Los motivos de la ley expuestos en la discusion habida en el Congreso constituyente. C. Las razones económicas constitucionales que demandan imperiosamente no se prive á los Estados de

los recursos que les dá el comercio interior, para cubrir su presupuesto y ser soberanos sin depender de la voluntad del poder general. D. La derogacion que la ley de 31 de Mayo de 1872, hizo de los artículos 19 y 83 del arancel de 19 de Enero del mismo año, cuya derogacion viene á ser interpretacion auténtica de la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion, indicando que los mismos Estados son soberanos para imponer contribuciones sobre el tráfico interior de mercancías.

Recibido el negocio á prueba, dentro del término, el Sr. Alvarez del Castillo pidió que se libraran oficios á la Jefatura de Hacienda del Estado y á la Administracion de rentas de esta Capital, á fin de que la primera certificara haber pedido guía de exportacion, mediante el pago del derecho de cinco por ciento, y la segunda para que informara que el Sr. D. Teodoro Kunhard habia satisfecho el uno y medio por ciento correspondiente á la suma de diez mil pesos, que en la misma conducta habia sido llevada á Colima.

La Jefatura de Hacienda, certificó: que las personas que se expresan á continuacion, habian pagado el cinco por ciento de exportacion, recibiendo la guía correspondiente. Los Srs. á que se refiere el certificado, son los siguientes: Oetling y Cª, G. H. Satler, Martinez Negrete y Cª, Angel B. y Puga, Basabe y Arce, Alvarez Araujo y Cª, Teodoro Kunhard, Fernandez Somellera Hermanos, Antonio Alvarez del Castillo y Agustin Blume.

La Administracion de la aduana informó, que D. Carlos Macker habia satisfecho oportunamente á nombre del Sr. D. Teodoro Kunhard, el uno y medio por ciento de estraccion por la cantidad de diez mil pesos, remitidos á Colima en la misma conducta; y con motivo de este pago, remitió el Gobierno del Estado á este juzgado una copia de la lista formada en aquella administracion, de las guías que tenia expedidas para la conducta que salió el dia 13,

llamando la atencion, respecto del término de la guía sacada por D. Agustin Blume, y que era Colima, Manzanillo y Guaymas.

Segun decia el gobierno en ese oficio, quedando á voluntad de los comerciantes el expresar qué exportan, los derechos impuestos por el Estado quedarian impunemente defraudados, y hacia notar tambien, el hecho de haber sacado su dinero el Sr. Blume, para Guaymas y no para el extranjero.

Este juzgado, considerando:

1ª Que conforme á la significacion filosófica y legal de la palabra exportacion, de que usa el artículo 112 de la Constitucion en su fraccion 1ª, hay exportacion de todas las especies amonedadas que salieron de esta ciudad el dia 13 de Enero, con guía de la Jefatura Superior de Hacienda, por que; 1ª, es filosófica esta inteligencia, supuesto que no hay razon para inhabilitarla para ejercer actos de comercio exterior á las personas residentes en los Estados no marítimos ni fronterizos, debiéndose decir que existe la exportacion siempre que un producto cualquiera sea destinado á salir del país. 2ª Es filosófica tal explicacion, por que limitada la exportacion á las fronteras de México, resultaria que los poderes federales no podrian seguir los actos de aquellos individuos que quisieran exportar, y esto solo por tener que transitar los efectos por algun Estado de la federacion antes que llegar al puerto, lo cual circunscribirla de una manera arbitraria las facultades federales. 3ª Es legal esta significacion, por que ejerciendo los poderes federales su imperio sobre todo el territorio nacional, pueden normar en toda su estension los actos, que segun la intencion de las personas, se refieran á la exportacion, pues lo contrario, esto es, circunscribiendo la exportacion á los Estados marítimos ó fronterizos, se limitaria el poder federal á cierta zona de territorio nacional. 4ª Es legal, por que la ley federal toma de hecho el acto de la exportacion bajo su direccion, des-

de que se inicia, imponiendo á los exportadores de plata acuñada, el deber de satisfacer los derechos de exportacion en el lugar de la extraccion, como lo previene el artículo 1º de la ley de 9 de Diciembre de 1871. 5º Es legal, porque la ley al exigir el pago de un 5 por ciento de exportacion, considera á esa mercadería como objeto de comercio exterior, y lo sujeta en todo á las leyes del centro federal. 6º Es legal, porque solo así surte los efectos que se propuso el legislador en la prevencion de la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitución, que se refiere en general á los Estados de la República, sin limitacion á los que tienen puertos. 7º Es por último legal, porque si se entendiera con la restriccion establecida por el Sr. Administrador, se daría lugar á un privilegio en los Estados fronterizos y marítimos, privilegio que no tendría razon de ser.

2º Que fijada de este modo la significacion filosófica y jurídica de la palabra exportacion, no puede caber duda en que la hay en el presente caso por parte de las casas mercantiles de esta ciudad, que sacaron la plata acuñada el día 13 de Enero con las guías de exportacion federales, y pagando el 5 por ciento federal.

3º Que siendo esos fondos objeto de exportacion, habiendo satisfecho los derechos federales y caminando con guía del centro federal, el derecho que se impuso por el Estado bajo el nombre del derecho de extraccion, viene á aumentar ó gravar el 5 por ciento pagado al Erario federal, no siendo en consecuencia sino un gravámen sobre una exportacion hecha, aunque se cubra con distintos nombres.

4º Que el derecho del uno y medio por ciento sobre conductas ordinarias establecido por primera vez en el presupuesto del Estado, decreto núm. 297, reglamentado en la ley de 17 de Junio de 1872, y vuelto á incluir en el presupuesto del corriente año por decreto núm. 357, tiende en este caso á gravar los derechos de exportacion, es-

TOMO V.—PARTE II.

tando redactados los artículos 2º y 7º del citado decreto de 17 de Junio de 1872, en el sentido que comprende la exportacion.

5º Que no está en las facultades del Estado alterar por medio de esos impuestos, las condiciones de la exportacion que fijan las leyes federales, á no ser que lo haga con consentimiento de las autoridades de la Union, pues la fraccion 1ª del art. 112 de la Constitución, declara que no pueden los Estados, sin consentimiento de las autoridades de la Union, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones y exportaciones.

6º Que sea cual fuere la interpretacion de la derogacion hecha en 21 de Mayo de 1872, de los artículos 1º, 19 y 83 del arancel general, esa derogacion solo se refirió á las importaciones, habiendo quedado en lo relativo á exportacion, la prevencion del artículo 78 del citado arancel, que declara libres las únicas escepciones que fija.

7º Que cualquiera que sea la interpretacion que á la derogacion de esos artículos se haga, nunca podrá modificar el sentido claro y espreso de su texto constitucional que ha querido poner el comercio extranjero bajo la autoridad exclusiva de los poderes federales, mucho mas si se considera el cuidado con que ha sido visto el comercio de exportacion, para el que pedía el Sr. D. Santos Degollado, absoluta franquicia en el Congreso constituyente.

8º Que á mas de ser claro y explícito el texto constitucional, su interpretacion no puede ser distinta de la que fija el presente juzgado, y es la misma que dan nuestros mejores escritores sobre derecho público, como son: el Sr. Castillo Velazco, en sus lecciones de derecho constitucional, y el Sr. D. Guillermo Prieto, que en sus lecciones de economia política, se espresa del modo siguiente: "Ultimamente se ha visto por un Estado imponer derechos al municipio en su extraccion, infringiendo el artículo 112 de la Constitución, y luchar otro tanto por imponer derechos á los efectos es-

\$9

trangeros, como si pudiera en uno residir el derecho de que se hiciese la venta, y en otro del juicio á que se hiciese, rompiendo con todos los principios económicos que la Constitución ensalsa y eleva al rango de leyes."

9º Que por el certificado de la Gefatura de Hacienda, está plenamente demostrado que las casas peticionarias han satisfecho los derechos de exportacion, recibiendo guías para el puerto del Manzanillo, con escepcion de diez mil pesos, cuyos derechos satisfizo Don Teodoro Kunhardt por no haber comprendido esa extraccion en el amparo, y de ocho mil pesos de los Señores Somellera que no causaron derechos por no haberse sacado del Estado.

10º Que en cuanto á la guia de D. Agustin Blume, que marca por término Guaymas, hay la poderosa consideracion de que habiendo pagado el mismo Sr. Blume, los derechos de exportacion, como consta del certificado de la Gefatura de Hacienda, su dinero está sujeto á las leyes que norman la exportacion, sin que pueda suponerse intencion de defraudar al Estado, puesto que paga el derecho mayor de extraccion, y en tal caso nada tiene que ver ninguna ley si vuelve á entrar su plata al país despues de pagada su exportacion, por que esa operacion únicamente sería en perjuicio suyo por el hecho de obligarse á pagar; y

11º Que es imposible suponer que se defraudaran los derechos de los Estados, en caso de accederse á la solicitud de los peticionarios, pues aun cuando sea voluntario para el comerciante manifestar que exporta, esa manifestacion lo obliga á sacar guías federales y pagar el cinco por ciento de exportacion, en vez del uno y medio por ciento del Estado.

Por tales consideraciones y fundamentos y apoyado ademas este Juzgado en la ley de 20 de Enero de 1869, falla con las proposiciones siguientes:

1ª La Justicia de la Union ampara y protege á las casas mercantiles que sacaron

guías federales, para los fondos mandados en conducta, salida de esta Capital el dia 13 de Enero próximo pasado y á que se refiere el certificado de la Gefatura de Hacienda del Estado, siendo estos Señores D. Antonio A. del Castillo, Octling y Ca, G. II. Sotler, Martinez Negrete y Ca, Angel B. y Puga, Basabe y Arce, Alvarez Aranzo y Ca, Teodoro Kunhardt, Fernandez Somellera y Hermanos y Agustin Blume.

2ª Notifiquese esta sentencia á los interesados, publíquese en el periódico oficial del Estado, y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El C. Juez de Distrito lo sentenció y firmó.—D. I. Trejo.—G. J. Gallegos.

Es copia. Guadalajara, Febrero 17 de 1874.—G. J. Gallegos.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Marzo 28 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por los Sres. D. Antonio Alvarez del Castillo, Basabe y Arce, Francisco Martinez Negrete y Compania, R. Miravete, Fernandez Somellera Hermanos, Octling Rienschs p p, G. II. Sotler en liq, German Hell, Angel R. Puga, Teodoro y Kimhard y Agustin Blume, contra el cobro que les hace el gobierno del Estado, del derecho de uno y medio por ciento, por la extraccion del numerario que tenian que remitir para su exportacion en la conducta que debería salir de Guadalajara para el Manzanillo, el dia 12 del pasado Enero, cuyo impuesto establecido por decreto de la Legislatura del Estado, con fecha 31 de Mayo de 1872, número 297, y modificado por la ley número 357, es anticonstitucional, por invadir la esfera de la autoridad federal, con violacion del artículo 172, fraccion 1ª de la Carta fundamental de la Republica, exigiéndose como se exige el pago

de ese impuesto sobre moneda destinada á la exportacion, y Considerando:

Primero: que el referido impuesto de uno y medio por ciento, llamado de extraccion, cuando recae sobre los caudales puestos en conducta con destino al extranjero, á cuyo efecto han pagado ya á la Hacienda federal el cinco por ciento de exportacion y obtenido las correspondientes guías con escala ó sin ella; se convierte necesariamente en un verdadero derecho de exportacion que el Estado cobra sin el consentimiento del Congreso de la Union, como lo requiere la fraccion 1.<sup>a</sup> del artículo 112 de la Constitucion.

Segundo: que ademas de esto, la moneda, aunque bajo cierto respecto es una mercancía igual á cualquiera otra, y sujeta á las mismas leyes y principios que todas en su produccion y consumo, como lo acreditan las sanas teorías de la ciencia económica, bajo otros, conforme á las leyes fundamentales del país, se considera y debe considerarse como una mercancía especialísima que por lo mismo debe estar sujeta á leyes y condiciones tambien especiales.

Tercero: que bajo este respecto, la moneda en el régimen de gobierno que tiene adoptado la República, ha estado siempre sujeta en su produccion, circulacion y extraccion ó exportacion, á las leyes federales, y es conveniente que así se verifique en toda la República, que se perjudicaría notablemente si á cada uno de los Estados de la federacion fuera licito establecer reglas sobre su produccion, circulacion y exportacion.

Cuarto: que la necesidad de conservar el valor de la moneda, como una mercancía universal indispensable para realizar toda clase de transacciones mercantiles entre los diferentes pueblos de la tierra, al abrigo de alteraciones caprichosas y bajo la influencia de leyes uniformes, ha hecho que esta materia se someta á convenciones especiales entre las naciones, poniéndola bajo la proteccion del derecho internacional.

Quinto: que el Gobierno de la República á quien competiría celebrar una convencion de esta especie, en el caso de que así pareciera útil á los mismos intereses de la República, no podría hacerlo, si cada Estado de la federacion tuviera libertad de gravar la circulacion de la moneda, cualquiera que fuera la forma y el nombre de ese gravamen, que en último análisis vendría á producir alteraciones en el valor de la misma moneda.

Sexto: que por estas razones, el Gobierno del Estado de Jalisco ha sido incompetente para gravar los caudales extraídos fuera de su territorio, con un derecho cualquiera que sea su denominacion y caracter.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 72-fraccion 2.<sup>a</sup>, 112 fraccion 1.<sup>a</sup>; se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guadalajara en 16 de Febrero del presente año, en que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á las casas de comercio que sacaron guías federales para los fondos mandados en conducta salida de Guadalajara el 13 de Enero próximo pasado, y á que se refiera el certificado de la Jefatura de Hacienda del Estado, siendo estos Sres. D. Antonio Alvarez del Castillo, Oetling y Compañía, Gr. IL. Sotler, Martínez Negrete y Compañía, Angel R. Puga, Basabe y Arce, Alvarez Arango y Compañía, Teodoro I. Kimhard, Fernandez Somellera Hermanos y Agustín Blume.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Doca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pédro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de*



*Castañeda y Najera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 25 de Abril de 1874.—*Lic. Emilio Ordoz*, oficial mayor interino.

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato, contra Agustin Baltazar, por circulacion de moneda falsa.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: En la mañana del día 28 de Julio del presente año, fué aprehendido Agustin Baltazar á petición del C. Ricardo Fernandez, que lo acusó del delito de circulacion de moneda falsa; y en las diligencias que el Juzgado de Distrito practicó en averiguación de este delito, resulta, que en la noche del día 26 del mismo mes, Agustin Baltazar vendió al C. Ricardo Fernandez unos botines en seis reales y medio, y para que tomara esta cantidad, el C. Fernandez le dió un peso, pero pretestando no tener cambio, lo condujo á varios lugares con el objeto de conseguirle; hasta que encontraron á Doña Juana Garcia conocida del C. Fernandez quien ofreció prestar á este último los seis reales y medio para pagar los botines; Agustin Baltazar no quiso recibirlos, diciendo, que no era el precio en que habían convenido; y arrebatando al C. Fernandez lo dió un peso y huyó. La Sra. Garcia y el C. Fernandez reconocieron esta moneda, y convinieron que era falsa, que Agustin Baltazar había sustituido en lugar de la buena que había recibido.

Estos hechos constan por las declaraciones del C. Fernandez y de Doña Juana Garcia, quien expresó además las señas particulares del procesado. Estas declaracio-

nes, unidas á la certificación judicial y á la calificación hecha por dos peritos plateros, de la moneda entregada por el C. Fernandez, inclinan el ánimo á creer al procesado responsable del delito que se le atribuye; pero como ha negado en su preparatoria, en los carcos que resultaron y en su confesion con cargos, no solo haber hecho la sustitucion de las monedas como se ha dicho, sino tambien haber vendido botines al C. Fernandez, respecto de su culpabilidad, no existe otra prueba que el testimonio de su acusador y de Doña Juana Garcia.

La ley 32 tit. 16 part. 3ª, exige, para pronunciar una sentencia condenatoria, fundada en el dicho de testigos, el testimonio al menos de dos personas mayores de toda escepcion ó sin tacha, cuya prueba no existe contra Agustin Baltazar; porque el testimonio del C. Fernandez, no puede considerarse como el de un testigo de esta naturaleza por estar interesado en la causa y hacer las veces de acusador.

Por estas razones y con fundamento de la ley citada y del artículo 89 del Código penal, el Promotor fiscal pide que el Juzgado se sirva absolver al procesado del cargo que se le hizo en la presente causa.

Guanajuato, Noviembre 26 de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, Diciembre 19 de 1873.—Vista la presente acta instruida por circulacion de moneda falsa, contra Agustin Baltazar, soltero, de 23 años, zapatero, originario de Irapuato y vecino de esta Capital.

Resultando: que en la noche del sábado 26 de Julio de este año, el C. Ricardo Fernandez, contrató la compra de un par de botines amamellados, y para pagar el precio de seis y medio reales que había ofrecido, entregó un peso al vendedor, quien no teniendo consigo feria, llevó al comprador á diversos puntos para conseguirla, hasta que